

## INFORME

*Honorable Cámara:*

El presupuesto nacional es la ley de leyes. Es la ley que refleja el programa de gobierno para un ejercicio fiscal, con sus recursos, sus egresos, sus metas y sus programas.

El presupuesto nacional debe reunir todas las características que la técnica presupuestaria exige, esto es: programación, universalidad, exclusividad, unidad, acuciosidad, claridad, especificación, periodicidad, continuidad, flexibilidad y equilibrio.

El Congreso Nacional tiene la atribución de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional—artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional—, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas.

El presente proyecto de ley de presupuesto para el año 2006, se presenta como “proyecto alternativo” al proyecto de ley girado por el Poder Ejecutivo nacional, y propone, fundamentalmente, enfrentar con todas las herramientas posibles el flagelo de la desocupación, la indigencia y la pobreza. Similar esquema planteamos con una alternativa de presupuesto nacional para el año 2005.

Por otra parte, la presente propuesta le otorga un rol activo al Congreso Nacional, recuperando facultades y roles constitucionales que en la actualidad no cumple.

Siendo el presupuesto la “herramienta” fundamental del gobierno nacional para planificar y ejecutar su plan de gobierno, dado el contexto actual de crisis social que vive el país, resulta indudable que en el mismo se deben priorizar aspectos tales como: la desocupación, la pobreza, la indigencia y la cultura del trabajo. El Estado debe asumir el rol de la inclusión social.

Gobernar es generar trabajo, y el “trabajo” es un ordenador social por excelencia.

A partir de estos conceptos, nos formulamos algunos interrogantes, a saber:

—A pesar que el país está recuperando su tendencia al crecimiento, a nuestro juicio con mucha inequidad en la distribución del crecimiento, ¿qué expectativa de corto y mediano plazo tienen los desocupados y subocupados en nuestro país, los mayores de cuarenta años, de cincuenta, de sesenta, hombres y mujeres, jóvenes, madres solas, personas con capacidades diferentes, etcétera, que por diferentes razones no tienen trabajo, no pudieron capacitarse, no tiene un oficio especializado, no pudieron seguir estudiando, etcétera, etcétera? La respuesta es: ninguna o muy escasa.

—¿Qué pretende el desocupado: trabajo o asistencialismo? La respuesta es: trabajo, dignidad.

—¿Quién debe asumir la responsabilidad de ayudar a conseguir trabajo en las actuales condiciones que vive el país? La respuesta es: el Estado.

—¿Es posible pensar en un plan universal de inclusión social orientado a todos los ciudadanos de la República Argentina “desocupados”, dispuestos a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la cultura del trabajo? La respuesta es: sí, es posible.

—¿Es posible reemplazar el asistencialismo, la escasa cobertura y el clientelismo de los diferentes programas sociales-asistenciales que el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo nacional contempla, concentrando todos los esfuerzos en un solo programa que devuelva la dignidad del trabajo al hoy desocupado? La respuesta es: sí, es posible.

—¿Es utópico implementar esta nueva visión de inclusión social universal? La respuesta es: no. — Existe un antecedente exitoso en la provincia de San Luis, en donde en el año 2003, en menos de tres meses desde su implementación se logró reducir la tasa de desocupación de un 11,7 % del primer semestre del año al 3,7 % en el segundo semestre de 2003, según datos del INDEC, y continuó bajando en los meses posteriores, llegando a la tasa de desocupación provincial actual del 1,4 %.

—¿Es posible diseñar un proyecto de presupuesto alternativo para el año 2006, que contemple la creación de un “Plan de Inclusión Social Trabajo por Argentina”, que resuelva el problema de la desocupación en el país, que devuelva la dignidad del “trabajo”, que incluya a los 3.000.000 de desocupados, todo ello— sin afectar los recursos previstos para los empleados públicos, para la salud, para la seguridad, para la educación, para las universidades, para las provincias, para el plan de obras públicas, es decir, sin afectar presupuestariamente la base del plan general de gobierno y el plan de inversiones públicas que el Poder Ejecutivo nacional pretende llevar adelante el próximo año? Respuesta: sí— es posible.

—¿Disponemos de los recursos presupuestarios necesarios para financiar este nuevo plan de inclusión social? Respuesta: sí, disponemos de ellos.

Obviamente se requiere rediseñar el conjunto de partidas de ingresos y egresos que elevó el Poder Ejecutivo nacional a esta Honorable Cámara de Diputados en el marco del proyecto de ley de presupuesto 2006. Y esto se puede realizar básicamente en dos aspectos: 1) Desde el punto de vista de los recursos, se deben exteriorizar los recursos reales que dispondrá el ejercicio venidero, esto es corregir la subestimación de ingresos tributarios en base a un crecimiento prudentemente estimado del PBI del 5 % y en segundo lugar, incluir, como nueva fuente de financiamiento, el excedente financiero del año 2005, y 2) Desde el punto de vista de los egresos presupuestarios, reasignar las partidas presupuestarias de

los principales programas sociales asistenciales, eliminando el programa de Jefes y Jefas de Hogar, el programa Familias por la Inclusión Social, el programa Manos a la Obra, el Programa de Seguridad Alimentaria, entre otros, para ser reemplazados por un único Plan de Inclusión Social.

Se adjunta al presente un cuadro general comparativo entre el proyecto de presupuesto 2006 elevado por el Poder Ejecutivo nacional y el presente proyecto de presupuesto alternativo para dicho año, de la administración nacional.

**Comparativo global entre proyecto de presupuesto 2006 del PEN y presupuesto alternativo con Plan de Inclusión Social – “Trabajo por Argentina”, correspondiente a la administración nacional.**

*(En millones de pesos)*

	Proyecto PEN	Proyecto alternativo - con plan de inclusión social
Recursos	101.141,90	110.633,18 <sup>1</sup>
Erogaciones	93.702,41	103.193,69
Corrientes	81.229,20	90.720,48
Personal	10.840,78	10.840,78
Bienes y servicios	5.168,87	5.168,87
Transferencias (inc. prestac. seguridad social)	54.805,64	64.296,92 <sup>2</sup>
Intereses de la deuda	10.413,91	10.413,91
Capital	12.473,21	12.473,21
Superávit financiero	7.439,49	7.439,49

(1) Se incluye un incremento de recursos por dos fuentes: 1.991,28 millones de pesos de recaudación tributaria – (crecimiento del PBI estimado del 5 %) y \$ 7.500 millones de superávit financiero 2005 considerado como recurso del año 2006.

(2) Incluye la Asignación Presupuestaria del Plan de Inclusión Social “Trabajo por Argentina”: 14.040 millones de pesos, estimado sobre la base de 3.000.000 de desocupados a razón de \$ 390/mes cada uno, anualizado y excluye los programas Jefes y Jefas de Hogar, Familias por la Inclusión Social, Manos a la Obra, y Seguridad Alimentaria, por un importe total de 4.548,72 millones de pesos.

Por todas las consideraciones expuestas, solicito al Congreso de la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2005.

*Claudio J. Poggi.*

**ANTECEDENTE**

Ver Trámite Parlamentario

**III**

**Dictamen de minoría**

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje 597 del 12 de septiembre de 2005 y el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2006 y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

**PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

**TÍTULO 1**

**Disposiciones generales**

**CAPÍTULO I**

*Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional*

Artículo 1° – Fíjense en la suma de ciento veinticinco mil ciento treinta y cinco millones doscientos veinticinco mil ciento sesenta y seis pesos

(\$ 125.135.225.166) los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio de 2006, con destino a las finalida-

des que se indican a continuación, y analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.

FINALIDAD	GASTOS	GASTOS DE	TOTAL
	CORRIENTES	CAPITAL	
Administración Gubernamental	5.678.599.577	396.166.639	6.074.766.216
Servicios de Defensa y Seguridad	6.540.008.641	251.997.212	6.792.005.853
Servicios Sociales	83.319.563.245	4.982.674.082	88.302.237.327
Servicios Económicos	3.232.607.026	10.087.699.744	13.320.306.770
Deuda Pública	10.645.909.000	0	10.645.909.000
<b>TOTAL:</b>	<b>109.416.687.489</b>	<b>15.718.537.677</b>	<b>125.135.225.166</b>

Art. 2° – Estímase en la suma de ciento veintitrés mil quinientos siete millones cuatrocientos noventa y un mil ochocientos trece pesos (\$ 123.507.491.813) el cálculo de recursos corrientes y de capital de la administración nacional, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla 8 anexa al presente artículo.

Recursos corrientes ..... \$ 125.432.556.925  
 Recursos de capital ..... \$ 1.102.819.220  
 Total: ..... \$ 126.535.376.145

Art. 3° – Fíjase en la suma de quince mil novecientos quince millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos (\$ 15.915.495.882) los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la administración nacional en la misma suma, según el detalle que figura en las planillas 9 y 10 anexas al presente artículo.

Art. 4° – Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de un mil cuatrocientos millones ciento cincuenta mil novecientos setenta y nueve pesos (\$ 1.400.150.979). Asimismo se indican a continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se

detallan en las planillas 11, 12 y 13 anexas al presente artículo:

Fuentes de financiamiento ..... \$ 59.733.922.793  
 – Disminución de la  
   inversión financiera ..... \$ 4.674.457.550  
 – Endeudamiento público e  
   incremento de otros pasivos ..... \$ 55.059.465.243  
 Aplicaciones financieras ..... \$ 61.134.073.772  
 – Inversión financiera ..... \$ 3.166.292.772  
 – Amortización de deuda y  
   disminución de otros pasivos ..... \$ 57.967.781.000

Fíjase en la suma de un mil ciento setenta y cinco millones novecientos cinco mil pesos (\$ 1.175.905.000) el importe correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la administración nacional en la misma suma.

Art. 5° – El jefe de Gabinete de Ministros, a través de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la presente ley a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la citada decisión y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes.

Art. 6° – No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente

artículo para cada jurisdicción, organismo descentralizado e institución de la seguridad social. Exceptuase de dicha limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional.

Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o. 1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos dictaminados favorablemente y los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas, de seguridad, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la Carrera del Investigador Científico-Tecnológico y de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Las excepciones previstas en el presente artículo serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de Ministros.

Art. 7° – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas.

Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, el personal científico y técnico de los organismos indicados en el inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente activo del servicio exterior de la Nación, así como los del personal de las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja durante el presente ejercicio.

## CAPÍTULO II

### *De la delegación de facultades*

Art. 8° – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte, con la condición de que su monto se compense con la disminución de otros cré-

ditos presupuestarios financiados con fuente de financiamiento 22 - Crédito externo.

Art. 9° – El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional. Exceptuase de dicha contribución a los recursos con afectación específica destinados a las provincias, y a los originados en transferencias de entes del sector público nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y contribuciones, de acuerdo con la definición que para éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

Art. 10. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley con sujeción a los artículos 37 de la ley 24.156 y 15 de la ley 25.917. Asimismo, déjase establecido que el jefe de Gabinete de Ministros podrá delegar las facultades conferidas por el presente artículo, en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios.

Art. 11. – Las facultades otorgadas por la presente ley al señor jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de responsable político de la administración general del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

## CAPÍTULO III

### *De las normas sobre gastos*

Art. 12. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2006 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas al presente artículo.

Art. 13. – Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de dos mil novecientos cuatro millones ciento catorce mil ciento veinte pesos (\$ 2.904.114.120), de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo. Las universidades nacionales deberán presentar en tiempo y forma la información que requiera el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, necesaria para asignar, ejecutar y eva-

luar los compromisos asumidos en los distintos programas que desarrolle la citada Secretaría. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología podrá disponer la no transferencia de partidas presupuestarias en caso de incumplimiento en el envío de dicha información.

Art. 14. – Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2° inciso a) de la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas.

Art. 15. – Los créditos vigentes del inciso 1 - Gastos en personal de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán atender en su totalidad los crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan por aplicación de las normas escalafonarias vigentes. El mayor costo que pueda originarse como consecuencia de modificaciones originadas en el ordenamiento general de la normativa laboral vigente será atendido con afectación a los créditos asignados en la presente ley. El jefe de Gabinete de Ministros queda facultado para disponer las modificaciones presupuestarias correspondientes.

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 62 de la ley 11.672 - Complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) por el siguiente texto:

Artículo 62: Los incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario y las autoridades superiores.

Esta norma no será de aplicación para los casos en que las promociones o aumentos respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor.

Art. 17. – Autorízase al Tesoro nacional a otorgar préstamos reintegrables al Fondo Unificado creado por el artículo 37 de la ley 24.065, por un

monto de hasta quinientos millones de pesos (\$ 500.000.000) con destino al pago de las obligaciones exigibles de dicho fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento sin distorsiones del sistema de estabilización de precios en el mercado eléctrico mayorista (MEM) mediante el auxilio financiero al Fondo de Estabilización creado por resolución 61 del 29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica, dependiente el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sus modificatorias y complementarias, en el marco del artículo 36 de la ley 24.065 y administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammsa), en su calidad de organismo encargado de despacho (OED) conforme el decreto 1.192 del 10 de julio de 1992. Las sumas efectivamente desembolsadas por el Tesoro nacional con destino al fondo unificado dada la emergencia energética en que se encuentra el sistema eléctrico serán devueltas a partir del ejercicio 2007 con más la tasa de interés equivalente a aquella que determine el Banco Central de la República Argentina para sus obligaciones de letras, aplicables al período de vigencia del préstamo. A tal efecto la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios deberá determinar el correspondiente cronograma de devolución y proceder a su comunicación a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, antes del 1° de mayo de 2007, en la medida que se haya dado cumplimiento al objetivo de readaptar el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista (MEM).

Art. 18. – Sustitúyese el artículo 2° del decreto 145 de fecha 22 de febrero de 2005 por el siguiente texto:

Artículo 2°: La transferencia de la Policía Aeronáutica Nacional dispuesta por el artículo 1° comprende sus competencias, unidades organizativas con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarios, manteniendo el personal transferido sus respectivos niveles y grados de revista escalafonarios vigentes a la fecha de la presente medida. Las erogaciones que demande el cumplimiento de los objetivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se atenderán con los créditos que fije anualmente la ley de presupuesto de la administración nacional.

Art. 19. – Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones del artículo 10 y en la oportunidad de proceder a la distribución de los créditos conforme al artículo 5° de la presente ley, a incorporar los créditos destinados al funcionamiento del Instituto Nacional de Promoción Turística creado por el artículo 13 de la ley 25.997 en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación.

Art. ... – Créase el programa 21 denominado Asignación Universal para los menores que será ejecutado por la entidad 850 (Administración Nacional de la Seguridad Social). Asígnese al mencionado programa la suma de nueve mil ochenta y cinco millones doscientos cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos (\$ 9.085.204.366) que tendrá como finalidad otorgar:

- a) Una asignación de sesenta pesos (\$ 60) mensuales para todos los menores de 18 años residentes en la República Argentina que no perciben ninguna prestación especificada en la ley 24.714;
- b) Una asignación hasta completar sesenta pesos (\$ 60) mensuales para los actuales beneficiarios de la ley 24.714;
- c) Una asignación por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal para todos los menores entre 6 y 18 años que concurran regularmente a establecimientos de enseñanza inicial, general básica y polimodal, que no estén alcanzados por el beneficio que fija el inciso d) del artículo 6° de la ley 24.714.

Art. ... – Créase por esta ley la jubilación ordinaria universal.

La jubilación ordinaria universal será otorgada a toda persona física, argentina o naturalizada con más de diez años de residencia en el país, que cuente con 65 años de edad y no cumpliera los requisitos necesarios para acceder a los beneficios previstos en la ley 24.241, cualquiera fuera la causa del incumplimiento. Esta prestación es incompatible con cualquier tarea en relación de dependencia.

La jubilación universal se otorgará en todos los casos sin “prueba ni declaración de pobreza” y con independencia de la situación patrimonial del cónyuge, conviviente o parientes del solicitante, siempre que los beneficiarios residan en territorio argentino.

El monto del beneficio será igual al haber mínimo que rija para los beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión, esto es los beneficios otorgados por leyes anteriores a la ley 24.241, cualquiera fuere la fecha de otorgamiento del beneficio.

Los beneficiarios de prestaciones universales tendrán derecho al pago de las asignaciones familiares en las mismas condiciones que los restantes jubilados y pensionados.

Para el otorgamiento y goce del beneficio universal aquí previsto se aplicarán supletoriamente las disposiciones del régimen público de reparto previsto en la ley 24.241 en todo aquello que no esté expresamente establecido en la presente ley.

Asígnese al mencionado programa la suma de seis mil novecientos diez millones cuatrocientos treinta y siete mil ciento ochenta y siete pesos (\$ 6.910.437.187).

Art. ... – Establécese el haber mínimo de cada beneficio correspondiente a las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en la suma de pesos quinientos (\$ 500) mensuales, a partir del 1° de enero de 2006. Asígnese al mencionado programa la suma de cinco mil doscientos ochenta y siete millones ochenta y ocho mil ochocientos setenta pesos (\$ 5.287.088.870).

Art. ... – Créase el programa 101 denominado Seguro de Empleo y Formación para todos los jefes de hogar desocupados que será ejecutado por la jurisdicción 75 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). Asígnese al mencionado programa la suma de tres mil trescientos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos veintinueve pesos (\$ 3.398.653.429) y los fondos correspondientes al Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y otros programas de empleo con el objeto de financiar pesos seiscientos noventa (\$ 690) mensuales por jefe de hogar desocupado.

Art. ... – Otórguese un aumento del 10 % en las retribuciones de todos los agentes de la administración nacional. Dicho aumento será financiado con los recursos previstos dentro del inciso 1 de gastos en personal. Si los créditos de la partida no alcanzan para cubrir el aumento establecido, el faltante se cubrirá con el remanente de otras partidas. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar la citada redistribución.

Art. ... – Otórguese un aumento del 10 % a los beneficiarios del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones que perciben un beneficio superior al haber mínimo de \$ 500 fijado para el curso del año 2006. Dicho aumento será financiado con los recursos previstos dentro de la partida de jubilaciones y pensiones. Si los créditos de la partida no alcanzan para cubrir el aumento establecido, el faltante se cubrirá con el remanente de otras partidas. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar la citada redistribución.

Art. ... – Fíjese en tres mil quinientos seis millones cien mil pesos (\$ 3.506.100.000) las transferencias a las provincias con destino a financiar un aumento del 10 % en las remuneraciones de la totalidad de los agentes provinciales.

Art. ... – Créase un fondo fiduciario con el objetivo de financiar capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas de hasta 40 empleados cuya facturación anual no supere los cinco millones quinientos mil pesos (\$ 5.500.000) con IVA incluido. Fíjese en tres mil doscientos cuarenta y cinco millones trescientos treinta y tres mil (\$ 3.245.333.000) las transferencias al presente fondo.

#### CAPÍTULO IV

##### *De las normas sobre recursos*

Art. 20. – Dispónese el ingreso como contribución al Tesoro nacional de la suma de cuatrocientos

tos noventa y ocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos (\$ 498.484.000), de acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa al presente artículo.

El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos y adecuará la planilla en función de lo dispuesto en el párrafo precedente.

Art. 21. – Fíjase en la suma de cuatro millones ochocientos cincuenta mil pesos (\$ 4.850.000) el monto de la tasa regulatoria según lo establecido en el párrafo primero del artículo 26 de la ley 24.804 Ley Nacional de la Actividad Nuclear.

Art. 22. – El porcentaje a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la ley 25.641 será asignado a partir del presente ejercicio de la siguiente forma: cero coma cuatro por ciento (0,4 %) al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el cero coma uno por ciento (0,1 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Estos fondos serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la Administración Nacional de Aduanas, debiendo ser depositados por ésta directamente a la orden de los organismos mencionados precedentemente en el Banco de la Nación Argentina.

Art. 23. – Límitase para el ejercicio fiscal 2006 al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota establecida por el inciso a) del artículo 1° del decreto 1.399 del 4 de noviembre de 2001.

Art. 24. – Suspéndese para el ejercicio de 2006 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal creado por el artículo 9° de la ley 25.152, con excepción de la afectación de los recursos provenientes de las concesiones en los términos que establece el referido artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento global de la administración nacional sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a destinar al Fondo Anticíclico fiscal el excedente financiero no aplicado.

Art. ... – Deróguese el artículo 9° de la ley 24.241 y restitúyanse los porcentuales de las contribuciones patronales establecidos en las leyes 24.241, 24.714 y 19.032 con sus modificatorias.

Art. ... – Deróguense los decretos 814/01, el decreto 815/01 y decreto 510/03.

Art. ... – Deróganse los artículos 103 bis, 105, 105 bis y 223 bis de la ley 20.744 y sus modificatorias.

Art. ... – Los incrementos de las contribuciones patronales fijados por los artículos precedentes no se efectuarán para aquellos sujetos económicos que ocupen hasta cuarenta empleados y cuya facturación anual con IVA incluido no supere la suma de cinco millones quinientos mil pesos (\$ 5.500.000). Esta disposición operará de manera transitoria hasta que se implemente un tratamiento integral de las pequeñas y medianas empresas que libere a las con-

tribuciones patronales de estas firmas de objetivos y funciones que no le competen.

## CAPÍTULO V

### *De los cupos fiscales*

Art. 25. – Fíjase el cupo anual a que se refiere el artículo 3° de la ley 22.317 en la suma de dieciocho millones de pesos (\$ 18.000.000). Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar su distribución.

Art. 26. – Fíjase el cupo anual establecido en el artículo 9°, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de veinte millones de pesos (\$ 20.000.000).

## CAPÍTULO VI

### *De la cancelación de deudas de origen previsional*

Art. 27. – Establécese como límite máximo la suma de cuatrocientos cuatro millones ochocientos mil pesos (\$ 404.800.000) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho organismo, cuya cancelación se realiza en efectivo, conforme a la legislación vigente. La cancelación de deudas a que hace referencia el párrafo anterior está sujeta a la disponibilidad de los respectivos recursos, que para el presente período fiscal se afectarán observando estrictamente los siguientes órdenes de prelación:

- a) *Cancelación de deuda consolidada:* los recursos se distribuirán entre los acreedores, atendiendo en primer lugar a los de mayor edad y, dentro de este ordenamiento, dando prioridad a los que tengan menores acreencias a cobrar;
- b) *Cancelación de sentencias judiciales:* los recursos se aplicarán según el siguiente orden de prelación:

- 1) Al cumplimiento de las sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores a 2006 y aún pendientes de pago, respetando estrictamente el orden cronológico de la notificación de las sentencias judiciales. Para igualdad de orden cronológico, se atenderá en primer lugar, la deuda correspondiente a los beneficiarios de mayor edad;
- 2) Habiéndose cumplimentado la disponibilidad del pago de las sentencias incluidas en el apartado anterior, el crédito presupuestario disponible será aplicado al cumplimiento de las sentencias notificadas en el año 2006, siguiendo igual orden de prelación que el establecido en el apartado precedente.

La cancelación de sentencias conforme a lo dispuesto, se realizará según el orden de prelación que con una periodicidad semestral, sobre la base de las sentencias registradas en cada momento, establezca la Administración Nacional de la Seguridad Social en los meses de enero y julio.

Art. 28. – La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente, así como el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública, será atendida con el monto correspondiente a la Administración Nacional de la Seguridad Social determinado en la planilla anexa al artículo 46 de la presente ley, observándose para su puesta al pago los criterios de prelación dispuestos en el inciso b) del artículo anterior.

Asimismo, se incluye en el inciso 7 –Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, del organismo 850– Administración Nacional de la Seguridad Social, hasta la suma de dos millones de pesos (\$ 2.000.000) para la cancelación de deudas previsionales, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de deuda pública, con ex magistrados, funcionarios y pensionados del Poder Judicial de la Nación.

Art. 29. – Exceptúase del orden de prelación establecido para el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes de beneficiarios previsionales mayores de setenta y ocho (78) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que ellos o algún miembro de su grupo familiar primario, padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y en un solo pago.

Art. 30. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a implementar un programa general de cancelación de deudas previsionales por reajuste de haberes, relativos a beneficios de leyes anteriores a la ley 24.241. El aludido programa deberá ser de adhesión voluntaria e implicar una deducción en el monto del principal y/o los intereses, que deberá ser proporcional a la etapa procesal en que se encuentre el reclamo administrativo o judicial. Este programa deberá establecer el orden de prelación que regirá el pago de las deudas.

Lo dispuesto precedentemente, deberá realizarse sin que su cumplimiento afecte los procesos de liquidación y puesta al pago de sentencias judiciales firmes de aquellos beneficiarios que no adhieran al referido programa.

Art. 31. – La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente, en cumplimiento de sentencias judiciales que orde-

nen el pago de retroactivos y reajustes por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina determinados en la planilla anexa al artículo 46 de la presente ley.

Art. 32. – Establécese como límite máximo la suma de setenta y nueve millones doscientos cincuenta y un mil pesos (\$ 79.251.000) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con el siguiente detalle:

– Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares: .....	\$ 10.649.000
– Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina: .....	\$ 56.784.000
– Servicio Penitenciario Federal: .....	\$ 1.039.000
– Gendarmería Nacional: .....	\$ 7.779.000
– Prefectura Naval Argentina: .....	\$ 3.000.000

Art. 33. – Los organismos a que se refieren los artículos 31 y 32 de la presente ley deberán observar estrictamente el orden de prelación que a continuación se detalla, para la cancelación de las deudas previsionales:

- a) Sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago;
- b) Sentencias notificadas en el año 2006.

En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad y, en el segundo, se respetará estrictamente el orden cronológico de la notificación de las sentencias definitivas, conforme el orden de prioridades que con una periodicidad cuatrimestral, sobre las bases de las sentencias registradas en cada momento, establezcan los respectivos organismos descentralizados y servicios administrativos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo.

Art. 34. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en la presente ley para la cancelación de sentencias judiciales previsionales correspondientes al régimen previsional público a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social conforme el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera, así como también a ampliar la autorización dispuesta en el artículo 46

para la colocación de bonos de consolidación previsional en la medida en que fuera necesario para el pago de las referidas sentencias judiciales.

Art. 35. – Dispónese que la Administración Nacional de la Seguridad Social deberá atender a partir del año 2006 el servicio de los bonos de consolidación previsionales en circulación colocados para el pago de sentencias judiciales previsionales y deudas previsionales consolidadas.

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo.

## CAPÍTULO VII

### *De las jubilaciones y pensiones*

Art. 36. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley 22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y uno por ciento (41 %) del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.

Art. 37. – Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio. Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones gratificables que fueran otorgadas por el artículo 44 de la ley 24.764.

Las pensiones gratificables prorrogadas por la presente ley, y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967 deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación:

- a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a sesenta mil pesos (\$ 60.000);
- b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador otorgante, quedando exceptuados los beneficiarios discapacitados;
- c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma de trescientos pesos (\$ 300) y serán compatibles con cualquier otro ingreso siempre que, la suma total de estos últimos, no supere dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas en relación a sus padres.

En todos los casos de prórrogas aludidos en el presente capítulo, la autoridad de aplicación deberá mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios.

Las pensiones gratificables que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre que las citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la ley que las otorgó.

Art. 38. – Asígnase durante el año 2006 la suma de trescientos cuarenta y nueve millones doscientos mil pesos (\$ 349.200.000) de la contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para la atención de programas de empleo de la Jurisdicción 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

## CAPÍTULO VIII

### *De las operaciones de crédito público*

Art. 39. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.

Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.

El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera realizará las operaciones de crédito público que correspondan a la administración central. El Ministerio de Economía y Producción podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y modo establecidos en el primer párrafo.

Art. 40. – Dase por finalizado el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional dispuesto en la ley 25.967 de Presupuesto para la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2005, a excepción de:

- a) Las obligaciones comprendidas en la ley 26.017;
- b) Las obligaciones diferidas en los términos del artículo 46 de la ley 25.967 de Presupuesto para la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2005 y que no resultaron ele-

gibles para la operación de reestructuración aprobada por el decreto 1.735 de fecha 9 de diciembre de 2004.

Art. 41. – Establécese que no se encuentran comprendidas en los incisos *a)* y *b)* del artículo precedente, las siguientes obligaciones:

- a)* Los servicios financieros de los bonos de consolidación de deudas previsionales tercera serie en dólares estadounidenses –en los términos del decreto 471 del 8 de marzo de 2002– que estén en poder de sus tenedores originales cuyas tenencias se hayan mantenido sin variación, o por la parte que cumpla con esta condición;
- b)* Los servicios financieros de los bonos de consolidación en moneda nacional cuarta serie y los bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional tercera serie;
- c)* Las letras del tesoro (LETES) emitidas en virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572 del 1° de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de diciembre de 2001 y normas complementarias:
  - I) Que estén en poder de personas físicas de setenta y cinco (75) años o más de edad, y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la Caja de Valores S.A. al 31 de diciembre de 2001 y que se mantengan sin variación, o por la parte que cumpla con esta condición.
  - II) Que estuviesen en poder de personas que atraviesen situaciones en las que estuviera en riesgo la vida, o aquellas en las que exista un severo compromiso de su salud por el riesgo de incapacidad que presuma la patología y la imposibilidad de postergación del tratamiento por un lapso mayor a dos (2) años, las que serán consideradas individualmente, en el marco del decreto 1.310 del 29 de septiembre de 2004 y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en Caja de Valores S.A. a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la resolución 73 del 25 de abril de 2002 del ex Ministerio de Economía;
- d)* Los servicios financieros de aquellos instrumentos emitidos en el marco del decreto 1.387 de fecha 1° de noviembre de 2001, posteriormente complementado por los decretos 644 de fecha 18 de abril de 2002 y 79 de fecha 13 de enero de 2003;
- e)* Los servicios de deuda de los organismos multilaterales de crédito;
- f)* Los servicios de los préstamos contratados por el Estado nacional con orga-

nismos del sector público nacional, no pertenecientes al sistema financiero, que hayan sido destinados al financiamiento de obras de infraestructura;

- g)* Los servicios de deuda de la República Argentina con otros países cuando se hayan cedido a fondos, que funcionen en el ámbito de la administración central, destinados a preservar, proteger o administrar los recursos naturales y biológicos;
- h)* Las obligaciones del gobierno nacional, derivadas de gastos como comisiones de agencia de registro; agencia fiscal; agente de listado y agente de pago, gastos de bolsa, traducción, legales, de asesoramiento para la negociación de la deuda externa y con organismos multilaterales, de imprenta y agencias calificadoras de riesgo, las que serán analizadas caso por caso en la medida en que sean necesarias para mantener el proceso de negociación y pagos previsto, en las condiciones establecidas en la resolución del ministro de Economía y Producción 677 del 8 de octubre de 2004.

Art. 42. – Dispónese la prórroga de la suspensión hasta la finalización del presente ejercicio fiscal, dispuesta en el artículo 1° del decreto 493 del 20 de abril de 2004 y facúltase al Poder Ejecutivo nacional a normalizar en los términos del artículo 43 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados en el artículo 1° del decreto antes citado.

Art. 43. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el artículo 40, inciso *b)* de la presente ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, quedando facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo. El Ministerio de Economía y Producción informará semestralmente al Honorable Congreso de la Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.

Art. 44. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, a negociar la reestructuración de las deudas con acreedores oficiales del exterior que las provincias le encomienden.

En tales casos el Estado nacional podrá convertirse en el deudor o garante frente a los citados acreedores en la medida en que la jurisdicción pro-

vincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante en idénticas condiciones a las que éste pacte con los acreedores externos.

A los efectos de la cancelación de las obligaciones asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios coparticipables, mediante un mecanismo de repago que en ningún caso podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo nacional o las jurisdicciones provinciales participantes. Asimismo el Estado nacional podrá coordinar las acciones tendientes a la reestructuración de la deuda externa de las jurisdicciones provinciales no comprendida en los párrafos precedentes, a solicitud de las mismas.

Art. 45. – Las obligaciones consolidadas en los términos de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 25.344, 25.565 y 25.725 y las que su cancelación se hace efectiva mediante la entrega de los títulos creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado hasta el 31 de diciembre de 2001, serán atendidas mediante la entrega de bonos de consolidación en moneda nacional cuarta serie 2 % y bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional tercera serie 2 %, según lo que en cada caso corresponda.

Las obligaciones consolidadas en los términos de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 25.344, 25.565 y 25.725, y las que su cancelación se hace efectiva mediante la entrega de los títulos creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán canceladas mediante la entrega de los bonos de consolidación sexta serie y bonos de consolidación de deudas previsionales cuarta serie, según lo que en cada caso corresponda. Exceptúase de lo dispuesto en los párrafos anteriores a las obligaciones comprendidas en las leyes 24.411, 24.043 y 25.192 las que continuarán siendo canceladas mediante la entrega de bonos de consolidación en moneda nacional segunda serie 2 %.

La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la ley 25.565 y los artículos 38 y 58 de la ley 25.725, resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999, y anterior al 1° de enero de 2002 o al 1° de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda. Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a que se refiere el artículo 13 de la ley 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes. En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1° de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la ley 23.928, en el 1° de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la ley

25.344, y en el 1° de enero de 2002 o el 1° de septiembre de 2002, para las obligaciones comprendidas en las prórrogas dispuestas por las leyes 25.565 y 25.725.

Art. 46. – Fíjase en dos mil novecientos millones de pesos (\$ 2.900.000.000) el importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales, en todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2°, inciso f), de la ley 25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 17 de la ley 25.967, incorporado a la ley 11.672 - Complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005), por los importes que en cada caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.

Las colocaciones serán efectuadas en el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción de los formularios de requerimiento de pago que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación hasta agotar el importe máximo de colocación fijado por el presente artículo. Facúltase al Ministerio de Economía y Producción a realizar modificaciones dentro del monto total a que se refiere la citada planilla.

Art. 47. – Fíjanse en la suma de cuatro mil millones de pesos (\$ 4.000.000.000) y en la suma de quinientos millones de pesos (\$ 500.000.000) los montos máximos de autorización a la Tesorería General de la Nación y a la Administración Nacional de la Seguridad Social, respectivamente, para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82 y 83 de la ley 24.156.

Art. 48. – La Secretaría de Hacienda podrá solicitar al Banco Central de la República Argentina adelantos transitorios en el marco de las disposiciones del artículo 20, sustituido por el artículo 15 de la ley 25.780, de la carta orgánica del citado organismo.

Art. 49. – Dentro del monto autorizado para la jurisdicción 90 - Servicio de la deuda pública se incluye la suma de dieciocho millones de pesos (\$ 18.000.000) destinada a la atención de las deudas referidas en los incisos b) y c) del artículo 7° de la ley 23.982.

## CAPÍTULO IX

### *Otras disposiciones*

Art. 50. – Ratifícanse los decretos 493 del 20 de abril de 2004, 528 del 28 de abril de 2004, 1.898 del 22 de diciembre de 2004, 2.007 del 29 de diciembre de 2004, 540 del 30 de mayo de 2005, 977 del 18 de agosto de 2005 y 1.047 del 31 de agosto de 2005.

Art. 51. – Dase por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del Estado que se encuentre en proceso de

liquidación de acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.

Establécese como fecha límite para la liquidación definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de 2006 o hasta que se produzca la liquidación definitiva de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados en la presente prórroga, por medio de la resolución del Ministerio de Economía y Producción que así lo disponga, lo que ocurra primero.

Art. 52. – Extiéndense las previsiones del artículo 1° del decreto 1.733 de fecha 9 de diciembre de 2004, ratificado por el artículo 7° de la ley 26.017, a los títulos públicos provinciales que cuenten con la autorización prevista en el artículo 25 y al ejercicio de las facultades conferidas por el primer párrafo del artículo 26 ambos de la ley 25.917.

Art. 53. – Sustitúyese el último párrafo del artículo 9° de la ley 24.156 por el siguiente texto:

En el contexto de esta ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades:

*a) Institucionales*

- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo nacional;

*b) Administrativo-Financieras*

- Servicio de la deuda pública
- Obligaciones a cargo del Tesoro

Art. 54. – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 11.672 - Complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) por el siguiente texto:

Déjanse sin efectos en sus partes pertinentes las normas vigentes que crean, facultan o establecen el funcionamiento de fondos de reserva, economías de inversión o similares, constituidos con saldos de créditos no comprometidos al finalizar el ejercicio y/o ejercicios anteriores.

Art. ... – Se suspende durante el año 2006 la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal.

## CAPÍTULO X

### *De la ley complementaria permanente*

Art. 55. – Incorpóranse a la ley 11.672 - Complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) los artículos 51, 55 y 60 de la ley 25.967 y el primer pá-

rrafo del artículo 35 y el artículo 52 de la presente ley.

Art. ... – Suprímase de la planilla anexa al artículo 25 de la ley 24.061, al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el que actuará en jurisdicción del Ministerio de Salud como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo nacional. Modifíquese en lo pertinente el artículo 92 del decreto 1.110/2005 ordenador de la ley 11.672 - Complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005).

## TITULO II

### **Presupuesto de gastos y recursos de la administración central**

Art. 56. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 A anexas al presente título, los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley.

## TITULO III

### **Presupuesto de gastos y recursos de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social**

Art. 57. – Detállanse en las planillas resumen 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente título los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley.

Art. 58. – Detállanse en las planillas resumen 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente título los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley.

Art. 59. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Claudio R. Lozano.*

## INFORME

*Honorable Cámara:*

*A) Otro presupuesto para otra política económica*

El proyecto de presupuesto 2006 es un presupuesto que responde a una estrategia desarrollista presente en el actual enfoque de política económica. Así, el objetivo principal del presupuesto es apuntalar y subsidiar la inversión privada como mecanismo motor del crecimiento. No tiene por objetivo recomponer por la vía de políticas activas los ingresos del conjunto de la población.

Este hecho es más preocupante aun en un contexto donde, realizada la recomposición del nivel de actividad sobre un nuevo esquema de negocios, se está alcanzando los niveles de riqueza de 1998 pero donde la intervención fiscal ha tenido un carácter regresivo. Esto es así porque, descontando el efecto del incremento en los precios, la recaudación del 2005 es prácticamente similar al de 1998, mientras

que los gastos son menores. Es decir el superávit fiscal para el pago de deuda no se logró con mayores recursos sino ajustando el gasto. Más aun, dentro de un volumen de gasto menor, se expanden los gastos de capital (inversiones) y se contraen los gastos corrientes (salarios y jubilaciones). Es decir el incremento de las partidas de inversión y obra pública se financian con caídas en las prestaciones esenciales del Estado.

Este enfoque desarrollista del presupuesto y la política económica tiene como condición, aunque no lo reconozca, la actual desigualdad distributiva. La misma pretende ser superada, a futuro por los efectos del crecimiento. Es decir vuelve a sostener, de una manera más sutil, la vieja teoría del derrame. Nosotros nos oponemos a este enfoque. El mismo supone no entender que la desigualdad no sólo define condiciones en el presente sino que garantiza su perpetuidad. Es decir no sólo, se sostiene la actual desigualdad como condición del crecimiento, sino que por efectos de sostenerla, la misma se expande.

En concreto decir que la desigualdad se resuelve con el derrame futuro es asumir que la demanda de la economía será el consumo de los ricos y la demanda del mercado mundial (exportaciones). Así se conforma un nivel de producción y un perfil de inversiones acorde con esa estructura de demanda. Conviene resaltar que esta estrategia supone una elevada fragilidad y vulnerabilidad externa, puesto que motoriza el crecimiento de las importaciones y depende de condiciones externas (precios de las materias primas exportables, tasa de interés internacional, etcétera), que impactan críticamente en el balance de divisas; y por otro lado, en un contexto de depresión del mercado interno y realización de ganancias extraordinarias en pocos sectores y por pocas empresas, se inhibe la generación de un proceso de inversión que redunde en una mayor den-

sidad del tejido productivo. En resumen, difícilmente la economía argentina esté transitando un proceso de crecimiento que la aleje de la recta de estancamiento estructural que la gobierna desde hace 30 años.

Nuestro presupuesto en cambio comporta un verdadero cambio en el enfoque de la política económica. Supone motorizar el consumo popular como factor principal de demanda que impacta generando las condiciones para realizar otro tipo de oferta productiva y por ende otro tipo de inversión. Es una estrategia económica que le otorga racionalidad a la potenciación y dinamización de los sectores sociales hoy postergados. Por lo tanto requiere de otro tipo de Estado, que privilegie recuperar un papel protagónico en la inversión (no subsidiar la del capital concentrado) y que tenga por horizonte reindustrializar el tejido productivo potenciando el impacto ocupacional, el balance de divisas y el desarrollo tecnológico propio. Concebimos nuestro proyecto de presupuesto como una estrategia de shock redistributivo de carácter profundamente democrático que se sostiene en modificar drásticamente las condiciones que definen el actual esquema económico.

#### B) Diferencias con la presentación presupuestaria

Tal cual lo hiciera durante las presentaciones del presupuesto de 2004 y 2005, el Poder Ejecutivo vuelve a presentar un presupuesto que oculta recursos por la vía de la subestimación de recursos y la sobreestimación de gastos. La estrategia presupuestaria consistió en el logro de una abultada caja, de aproximadamente \$ 26.805,7 millones (ver cuadro 1) que quedaron a entera discreción del Poder Ejecutivo y que ha sostenido la actual política de desendeudamiento con los organismos multilaterales de crédito.

#### CUADRO 1

*Estimación de los recursos ocultos en los presupuestos 2004 y 2005 por subestimación de recursos y sobreestimación de gastos.  
En millones de pesos*

RECURSOS PRESUPUESTARIOS OCULTOS	2004	2005	Total
Subestimación de Recursos Totales (Pto Original vs Ejecución)	12.595,0	8.155,8	20.750,8
Sobreestimación de Gasto Primario (Pto Definitivo vs Ejecución)	1.885,5	4.169,4	6.054,9
<b>TOTAL DE RECURSOS OCULTOS</b>	<b>14.480,5</b>	<b>12.325,2</b>	<b>26.805,7</b>

*Fuente:* elaboración propia en base a presupuesto original 2004 y 2005 y ejecución 2004-2005

La construcción de la caja reconoce en la subestimación de recursos durante 2004-2005 su principal fuente. Como se observa en el cuadro 1, durante 2004-2005 se han ocultado recursos por \$ 20.750,8 millones. El Poder Ejecutivo aún no ha contestado el pedido de informes que realizó el Congreso de la Nación acerca del destino de los \$ 20.750,8 millones que el Parlamento no discutió durante 2004 y 2005 (por subestimación de recursos) y por lo tanto no autorizó su aplicación.

En este contexto el Poder Ejecutivo vuelve a reiterar esta estrategia de ocultamiento de recursos.

Ocultamiento que surge porque aun suponiendo que el PBI en 2005 termine creciendo al 7,3 % (como se dice en el presupuesto), dicho crecimiento tiene garantizado un arrastre estadístico de alrededor del 3,7 %. Es decir, crecer al 4 %, como dice el presupuesto, supone que en 2006 sólo se crecerá un 0,3 %. Por otro lado, la elasticidad de la recaudación –producto viene siendo en 2005 del 1,12 en lugar de 0,9 como se prevé en el presupuesto. Así las cosas, una pauta más real de crecimiento del PBI (6,5 %) y estimando distintas elasticidades (todas inferiores a lo que hoy ocurre) surge el siguiente cuadro:

CUADRO 2

*Estimación de la recaudación oculta del presupuesto 2006.  
Distintas hipótesis de elasticidades recaudación - producto.*

Aumento del PBI	Elasticidad recaudación - producto	Aumento de la recaudación total	Aumento de la recaudación de la Administración Nacional
6,5	0,9	\$ 2.691,1	\$ 2.152,9
6,5	1,0	\$ 4.470,1	\$ 3.576,1
6,5	1,1	\$ 6.327,3	\$ 5.061,8

*Fuente:* elaboración propia en base a datos oficiales.

Queda claro que el “ocultamiento de recursos” que el ministro presenta oscila en un rango que va desde un piso de \$ 2.691,1 millones a un máximo de \$ 6.327,3 millones. Tomaremos como hipótesis para el cuadro de financiamiento obtener durante 2006 \$ 3.576,1 millones adicionales a lo presupuestado para la administración nacional.

Por su lado el abultamiento de las partidas del gasto observa en que el presupuesto prevé gastos que son superiores a lo que surge del com-

promiso anualizado de los distintos incisos que lo componen. Este hecho es principalmente intenso en remuneraciones (\$ 778,8 millones de abultamiento), prestaciones a la seguridad social (\$ 2.845,9 millones de abultamiento), en las transferencias corrientes (\$ 2.168,7 millones de más) y en los gastos de capital (\$ 2.594,7 millones). En conjunto el abultamiento de las partidas del gasto durante 2006 ronda los \$ 8.616,7 millones. Ver cuadro 3.

## CUADRO 3

*Abultamiento del gasto por partidas en el presupuesto 2006.  
En millones de pesos*

CONCEPTO	Est.Oficial 2006	Est.Realista 2006	(7)-(6)-(5)
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>81.228,9</b>	<b>75.206,9</b>	<b>6.022,0</b>
- GASTOS DE CONSUMO Y OPERACION	16.009,7	14.996,4	1.013,3
Remuneraciones	10.840,8	10.062,0	778,8
Bienes y Servicios	5.167,8	4.934,4	233,4
Otros Gastos	1,1	0,0	1,1
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.413,8	10.413,8	0,0
Intereses	10.385,1	10.385,1	0,0
.. Intereses en Moneda Local	3.841,4	3.841,4	0,0
.. Intereses en Moneda Extranjera	6.543,7	6.543,7	0,0
Otras Rentas	28,7	28,7	0,0
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.767,9	25.922,0	2.845,9
- OTROS GASTOS CORRIENTES	3,7	0,0	3,7
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.033,8	23.865,1	2.168,7
Al sector privado	11.810,5	10.680,0	1.130,5
Al sector público	13.937,1	12.935,1	1.002,0
.. Provincias y MCBA	10.769,7	9.711,6	1.058,1
... Recursos Coparticipados	0,0	0,0	0,0
... Garantía Acuerdo Prov.	0,0	0,0	0,0
... Leyes Especiales	3.764,7	3.394,8	369,9
... Resto	7.005,0	6.316,8	688,2
.. Universidades	3.167,4	3.217,5	-50,1
.. Otras	0,0	6,0	-6,0
Al sector externo	286,2	250,0	36,2
- OTROS GASTOS	0,0	9,6	-9,6
- DEFICIT OPER. EMPRESAS PUBLICAS	0,0	0,0	0,0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.473,1</b>	<b>9.878,4</b>	<b>2.594,7</b>
- INVERSION REAL DIRECTA	4.092,8	3.097,2	995,6
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.637,8	5.331,2	1.306,6
A Provincias y MCBA	5.573,8	4.436,0	1.137,8
... Leyes Especiales	1.540,4	1.251,0	289,4
... Resto	4.033,4	3.185,0	848,4
Otras	1.064,0	895,2	168,8
- INVERSION FINANCIERA	1.742,5	1.450,0	292,5
A Provincias y MCBA	0,0	0,0	0,0
Resto	1.742,5	1.450,0	292,5
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>93.702,0</b>	<b>85.085,3</b>	<b>8.616,7</b>

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto 2006 y compromisos asumidos en el 2005.

De esta manera, entre subestimación de recursos y sobreestimación del gasto, el actual presupuesto quita del debate la consideración de prácticamente \$ 12.192,8 millones. Es decir transforma al Parlamento en un mero decorado donde no se discuten las prioridades presupuestarias sino que las mismas se fijan en otro lugar. Esto no es un hecho menor porque en la actual tesis del desendeudamiento las prioridades jerarquizan el pago a los acreedores externos por encima incluso de lo que se fija en el presupuesto. Por ejemplo el presupuesto de 2006 autoriza al pago por deuda en un monto de \$ 10.000 millones pero en realidad lo que va a terminar pasando es que esa cifra se incremente a \$ 26.900 millones (por el efecto del no acuerdo con el fondo para refinanciar capital por \$ 9.500 millones y por el superávit financiero de \$ 7.400 millones sin asignación específica).

Todo lo expuesto, contenido y presentación del presupuesto nos obligan a presentar un dictamen por otro presupuesto. Tenemos la firme convicción de que los recursos públicos con los que hoy cuenta el Estado deben ser puestos en resolver las dos prioridades básicas que tienen que resolver la sociedad argentina: el hambre y la pobreza.

### C) Por otro presupuesto 2006

Desde la perspectiva de que es posible en el transcurso del año 2006 poner en marcha programas presupuestarios que permitan redistribuir ingresos al conjunto de la población es que presentamos nuestro dictamen por otro proyecto de presupuesto 2006.

Una propuesta de redistribución progresiva del ingreso sobre la base de los recursos fiscales que no tienen asignación presupuestaria y otros de fácil consecución permitiría, además del contenido de justicia que lleva implícito, activar al consumo popular como factor de demanda que contribuya a impulsar un cambio en la composición de la inversión y la oferta productiva de manera de impulsar otros vectores que potencien el proceso de crecimiento. Vectores que minimicen los desajustes estructurales en materia de divisas y que amplíen los espacios de inversión local.

Fundamentamos nuestra oposición al proyecto oficial en la explicitación de una propuesta presupuestaria alternativa para el 2006. Esta propuesta alternativa se nutre de criterios que enarbolará el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) en la consulta popular realizada los días 14 al 17 de diciembre del 2001 donde participaron más de tres millones de argentinos.

Las políticas presupuestarias que proponemos implementar para el 2006 son:

1) Asignación universal para todos los menores de 18 años de \$ 60 con la consiguiente generalización de la ayuda escolar anual de \$ 130.

2) Seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados de \$ 690.

3) Universalización del haber mínimo de \$ 390 para todos los mayores de 65 años sin cobertura previsional.

4) Aumento del haber mínimo de \$ 390 a \$ 500.

5) Aumento del 10 % en las remuneraciones de todos los agentes del Estado nacional de manera de mantener el poder adquisitivo durante el 2006.

6) Otorgamiento de un aumento del 10 % de los haberes del sistema de jubilaciones y pensiones que estén por encima del nuevo valor del haber mínimo universal de \$ 500. Medida que procura mantener el poder adquisitivo de los citados haberes durante el 2006.

7) Aumento del 10 % en las remuneraciones de todos los agentes de los estados provinciales, de manera de mantener el poder adquisitivo de los salarios provinciales durante el 2006.

8) Creación de un fondo fiduciario para financiar capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas de hasta 40 empleados, cuya facturación anual con IVA incluido no supere los \$ 5.500.000. Este stock de recursos debe darle financiamiento a los emprendimientos de los citados agentes económicos que tengan como horizonte satisfacer el incremento de demanda popular. Se jerarquizarán aquellos emprendimientos que potencien el impacto ocupacional, el balance de divisas y el desarrollo tecnológico propio.

A continuación desarrollaremos estas propuestas.

I) *Asignación universal para todos los menores de 18 años de \$ 60 con la consiguiente generalización de la ayuda escolar anual de \$ 130.*

Esta medida tiene un carácter estratégico. Es la mejor vía de transferir ingresos a los hogares más pobres habida cuenta que estos hogares presentan un promedio de 2,6 menores por hogar y los indigentes un promedio de 3 menores por hogar, mientras que para el promedio de hogares el número de menores es de 1,1 por hogar.

Por otro lado, proponemos otorgar la asignación contra el chequeo sanitario en los primeros años de vida del menor (0 a 6 años) y contra participación en el ciclo escolar en el resto (6 a 18 años). Es decir, la propuesta pretende garantizar ingresos, salud y educación para nuestros pibes.

Unica forma de salir de la "trampa de la pobreza" en que hoy nos coloca el hecho de tener a prácticamente el 60 % de la población menor en situación de pobreza. Si los futuros hombres del país transitan hoy las penurias del hambre y la privación, difícilmente puedan constituirse mañana como una fuerza laboral con el nivel de calificación que requiere el actual paradigma tecnológico que sitúa al conocimiento como la clave de los procesos productivos. Dicho de otro modo, no resolver hoy la pobre-

za en los menores traslada a futuro la vulnerabilidad presente por la vía de un deterioro de la productividad futura del trabajo. De esta manera, la pobreza de hoy garantiza mayor pobreza mañana.

Otorgar \$ 60 a todos los menores y generalizar la ayuda escolar anual de \$ 130 tiene un costo bruto de \$ 11.975,8 millones (ver cuadro 4).

#### CUADRO 4

*Costo de implementar la universalización de las asignaciones familiares de \$ 60 a todos los menores de 18 años y la ayuda escolar de \$ 130.  
En pesos corrientes*

Población	Cantidad	montos	Total Anual
Menores de 18 años	13.785.922	60	10.753.018.921
Entre 6 y 18 años	9.406.360	130	1.222.826.775
<b>Costo Bruto de las Políticas Sociales a Menores</b>			<b>11.975.845.696</b>

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

Sin embargo, esta medida al abarcar al conjunto de los menores incluye a aquellos que actualmente están cubiertos por el sistema de asignaciones familiares, el cual otorga una asignación de \$ 30, \$ 40 o \$ 60 para los trabajadores registrados según el monto de ingresos del trabajador. Los menores alcanzados por este régimen ascendían, en el censo 2001, solamente al 30 % de la población menor. Ciertamente es que durante este año se aumentó el rango de ingresos a partir del cual el trabajador accede a las asignaciones (de \$ 2.025 hasta \$ 2.600). No obstante

esta medida el aumento presupuestario previsto para el 2006 fue mínimo, de apenas \$ 265,5 millones (es decir, apenas 9 % superior al 2005). Lo limitado del aumento indica el escaso impacto en la población menor (sería como mucho un aumento de 680 mil menores en el Régimen de Asignaciones Familiares). Por ende, descontando los fondos que se destinan al Programa de Asignaciones Familiares, el costo neto de esta medida ascendería a \$ 9.085,2 millones (ver cuadro 5).

#### CUADRO 5

*Costo de implementar la universalización de las asignaciones familiares de \$ 60 a todos los menores de 18 años y la ayuda escolar de \$ 130, neto de los flujos previstos para los programas de asignaciones familiares del presupuesto 2006.  
En pesos corrientes*

Medida	Pesos
<b>Costo Bruto de las Políticas Sociales a Menores</b>	<b>11.975.845.696</b>
Ahorros por programa de asignaciones familiares	2.890.641.330
<b>Costo Neto de las Políticas Sociales a Menores</b>	<b>9.085.204.366</b>

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

La medida propuesta tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza. La tasa de la pobreza pasaría del 38,5 % al 33 %. Es decir, implicaría una

caída de la tasa del orden del 14,1 % lo que significaría que 2.126.152 personas dejarán de ser pobres. (ver cuadro 6).

#### CUADRO 6

*Efectos en la caída de la pobreza de universalizar las asignaciones familiares de \$ 60 a todos los menores de 18 años y la ayuda escolar de \$ 130.*

	Situación Actual	Con la medida	Diferencia	Variación (%)
Personas Pobres	15.029.035	12.902.883	-2.126.152	-14,1%
Tasa de Pobreza	38,5%	33,0%	-5,4%	-14,1%

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

Del mismo modo la tasa de indigencia pasaría del 13,6 % al 7 %. Es decir, una caída de la tasa del or-

den del 48,7 %, por lo que 2.587.465 personas dejarían de ser indigentes (ver cuadro 7)

CUADRO 7

*Efectos en la caída de la indigencia de universalizar las asignaciones familiares de \$ 60 a todos los menores de 18 años y la ayuda escolar de \$ 130.*

	Situación Actual	Con la medida	Diferencia	Variación (%)
Personas Indigentes	5.316.245	2.728.780	-2.587.465	-48,7%
Tasa de Indigencia	13,6%	7,0%	-6,6%	-48,7%

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

## II) Seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados de \$ 690.

Esta medida se inscribe como parte esencial de una intervención pública seria sobre el mercado laboral. El principal objetivo que persigue es garantizar un nivel de ingresos a todos los hogares que los ubique por encima de la línea de la pobreza. Por este motivo, debe estar articulada con la medida anterior. Siendo que el valor de la canasta de la pobreza para una familia tipo (compuesta por matrimonio y 2 menores) se ubica en \$ 802 y que hemos fijado en \$ 60 el valor de las asignaciones familiares, ubicando en \$ 690 el valor del seguro de empleo y formación garantizamos que no exista ningún hogar pobre en la Argentina.

Al mismo tiempo, al garantizarse un piso de ingresos para los jefes de hogar desocupados se estaría

operando un verdadero incremento del salario mínimo de la economía. A pesar de que el salario mínimo está fijado en \$ 630, los niveles de desocupación e informalidad laboral vigentes determinan que sea una mera formalidad. En la práctica, el verdadero salario mínimo está dado por los \$ 150 que otorga el Plan Jefes y Jefas. Nuestra propuesta implica reformular ese plan (y otros planes de empleo) de manera que sus fondos financien el seguro de empleo y formación y permitan garantizar que el nuevo salario mínimo para el conjunto de la fuerza laboral se ubique en \$ 690.

El total de jefes de hogar desocupados asciende a 551.427 jefes. A este total corresponde añadir los 241.627 jefes de hogar que actualmente perciben el plan jefes. Es decir, el total de jefes de hogar que percibirían el seguro de empleo y formación sería de 793.054 jefes (ver cuadro 8)

CUADRO 8

*Categorías ocupacionales de los jefes de hogar. 1º semestre 2005.*

Jefes según categoría ocupacional	Cantidad
Desocupados	551.427
Ocupados por Plan Jefes	241.627
<b>Desocupados Reales</b>	<b>793.054</b>

Fuente: Elaboración propia en base a la Base Usuario Ampliada -EPH- 1er Semestre 2005.

El costo bruto de esta propuesta asciende a \$ 6.566,5 millones. Los ahorros que se obtienen a partir de los fondos que se destinan al Programa

Jefas y Jefes y otros programas de empleo reducen el costo neto a \$ 3.398,7 millones (ver cuadro 9).

CUADRO 9

*Costo de asignar el seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados (incluyendo a aquellos que tengan el Plan Jefes como su ocupación principal) neto de los flujos previstos para los Planes de Empleo Jefes/as y Empleo Comunitario del Presupuesto 2006. Montos acordes a una asignación familiar de \$ 60.*

RUBROS	Jefes a otorgar el seguro	Montos	Costo Anual
Seguro de Empleo y Formación	793.054	690,0	6.566.486.926
Ahorro por Plan Jefes y Jefas de Hogar			2.746.948.797
Ahorro por Otros Planes de Empleo			420.884.700
<b>Costo Neto del Seguro</b>			<b>3.398.653.429</b>

Fuente: Elaboración propia en base a la Base Usuario Ampliada -EPH- 1er Semestre 2005 y Presupuesto 2006.

Además de operar como un piso de ingresos en el mercado laboral, el seguro de empleo y formación permite utilizar mano de obra financiada en la resolución de las necesidades más urgentes de la comunidad. Permite dar asistencia escolar, sanitaria, de cuidado a los menores y a los mayores de las familias de los sectores populares, activar emprendimientos de autoconstrucción de viviendas populares, tareas de urbanización de barrios postergados, etcétera. Es decir, permite ser utilizado como un instrumento vital en construir un área de economía pública y social que busque resolver necesidades postergadas y no maximizar beneficios empresarios.

Por otro lado, el seguro de empleo y formación es un instrumento que pretende dar cuenta del nuevo sistema de seguridad social que hay que construir en el marco del paradigma tecnológico vigente. Dicho paradigma le otorga un lugar clave al conocimiento creciente dentro de los procesos productivos. Por ende transforma en necesaria la permanente calificación de la fuerza laboral. Dicha calificación pasa actualmente por una opción individual según las posibilidades económicas de cada trabajador, operándose una disyuntiva fatal para el mismo: o trabaja (y no se califica) o se califica (y no trabaja, por lo tanto no tiene ingresos). Lo que el seguro pretende es instituir un circuito donde la fuerza laboral tenga garantizado ingresos de modo que pueda transitar, alternativamente, períodos de

formación y entrenamiento laboral con períodos de trabajo efectivo. Es decir, pretende gestionar el actual paradigma tecnológico, de manera que garantice entrenamiento y calificación laboral creciente, por ende productividad laboral creciente que permita sostener mayores niveles de riqueza, de salarios y de igualdad distributiva,

III) *Universalización del haber mínimo de \$ 390 para todos los mayores de 65 años sin cobertura previsional*

Esta medida pretende otorgarle ingresos a aquella franja de la población mayor que no tiene ningún tipo de cobertura previsional. Los mismos son 1.434.057 mayores, que equivalen al 37,1 % de la población mayor. Estos mayores no percibieron ninguno de los aumentos del haber mínimo y por consiguiente transitan una vejez de elevada vulnerabilidad, lo que los lleva, a una gran proporción, a seguir participando del mercado laboral.

Cabe aclarar que dentro de estos mayores se ubican los 101.502 mayores de 70 años en absoluta condición de indigencia que hoy perciben apenas \$ 273 (70 % de la jubilación mínima) que cubre el Programa Adulto Mayor Más. Por ende esta propuesta tiene como ahorro potencial los fondos de \$ 360,2 millones que actualmente se destinan a dicho programa. Así, el costo neto de esta medida asciende a \$ 6.910,4 millones (ver cuadro 10).

CUADRO 10

*Costo mensual y anual de otorgar una jubilación mínima a los mayores no cubiertos por el sistema previsional netos del Programa Adultos Mayor Más.*

	Cantidad	Haber mínimo	Costo Mensual	Costo Anual
Mayores sin cobertura	1.434.057	390	559.282.137	7.270.667.785
<b>Costo de la medida</b>				<b>7.270.667.785</b>
Cubiertos por el Plan Adulto Mayor Mas (Ahorro disponible)	101.502	273	27.710.046	360.230.598
<b>Costo Neto de la medida</b>				<b>6.910.437.187</b>

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

IV) *Aumento del haber mínimo de \$ 390 a \$ 500*

Esta medida pretende aumentar el haber mínimo de manera que la pauta inflacionaria del 10,6 % en el IPC que el presupuesto prevé, no signifique un deterioro en el poder adquisitivo de la prestación mínima que perciben el 66,2 % de los que están cubiertos por el sistema previsional. El aumento de \$ 390 a \$ 500 en el haber mínimo implica una mejora del 28,2 % del haber mínimo que lo ubica por arriba del aumento en los precios. Es decir, si la pauta inflacionaria se cumple, esta medida permitiría un aumento real del haber mínimo del orden del 16 %.

La medida propuesta abarcaría:

- a) A los 2.057.447 mayores que actualmente perciben el haber mínimo;
- b) A los 1.434.057 mayores que, por la medida anterior, pasaron a percibir el haber mínimo;
- c) A los 63.446 mayores que actualmente cobran entre \$ 390 y \$ 400. Para este caso se calcula un aumento promedio de \$ 105;
- d) A los 319.438 mayores que actualmente perciben entre \$ 400 y \$ 500. Para este caso se tomó un aumento promedio de \$ 50.

El costo neto de esta medida asciende a \$5.287,1 millones (Ver cuadro 11).

## CUADRO 11

*Costo mensual y anual de incrementar la jubilación mínima a los mayores del sistema previsional a \$ 500.*

	Cantidad	Incremento en pesos	Costo Mensual	Costo Anual
Beneficiarios con la mínima prestación \$390 *	2.057.447	110	226.319.170	2.942.149.210
Mayores sin cobertura	1.434.057	110	157.746.244	2.050.701.170
Entre 390 - 400 **	83.448	105	8.661.830	86.603.790
Entre 400-500	319.438	50	15.971.900	207.634.700
<b>Costo de la medida</b>				<b>5.287.088.870</b>

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

Somos conscientes que esta medida presenta como problema el achatamiento de la pirámide previsional (prácticamente el 80 % de los beneficiarios del sistema cobrarían la mínima) y el consiguiente desincentivo al aporte previsional. Este hecho es el resultado lógico a que dio lugar el desenvolvimiento del mercado laboral en estos últimos 30 años. Desenvolvimiento que determina que sean verdaderamente los menos, aquellos trabajadores que pueden presentar 30 años de aportes al sistema previsional y que lo hagan con un salario que les permita ubicarse por encima del haber mínimo. El actual sistema previsional está inscripto así, en un escenario de permanente crisis. Esto es así, en tanto no se modifique la lógica económica actual. Nuestra propuesta para el 2006 es un paso en el sentido de revertir esa lógica.

Por un lado, se permitiría bajar la presión sobre el mercado laboral a partir de eliminar aquellas variables que constituyen el crecimiento espúreo de la PEA. Nos referimos a los menores y mayores que tienen que salir a buscar trabajo para completar ingresos en su hogar. Por otro lado, la implementación del seguro de empleo y formación con los criterios aquí expuestos, elevaría el salario mínimo, por cuanto ningún trabajador accedería a un puesto con un ingreso inferior a \$ 690. Al mismo tiempo, la reducción en el desempleo (de aproximadamente el 35 %) que la propuesta trae aparejada, eleva el poder de negociación de los trabajadores para definir sus ingresos y condiciones laborales (entre las que se encuentra el registro en la seguridad social).

Todas estas condiciones coadyuvan para superar la crisis del sistema previsional. No obstante, somos conscientes que constituir el nuevo sistema de seguridad social es una tarea compleja donde deberá tenerse en cuenta no sólo los problemas puntuales que hoy pesan sobre él (las reducciones en las contribuciones patronales, el sistema de las AFJP, el modo de calcular el haber) sino su articulación con el modo de reproducir la fuerza laboral a través del seguro de empleo y formación.

V) *Aumento del 10 % en las remuneraciones de todos los agentes del Estado nacional de manera de mantener el poder adquisitivo durante el 2006*

Habida cuenta que el proyecto de presupuesto 2006 prevé un incremento del 9,3 % en el índice de precios al consumidor para el 2006, resulta imprescindible garantizar que no se deteriore aún más el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Esta medida implica no deteriorar las prestaciones esenciales que realiza el Estado a través de sus agentes. El costo bruto de esta medida asciende a \$ 1.006,2 millones. Sin embargo, hay que consignar que esta partida está abultada en \$ 778,8 millones (ver cuadro 12). Por lo que el costo neto a financiar es de \$ 227,4 millones. Este financiamiento se cubrirá con los remanentes que surgen del abultamiento de las partidas de prestaciones a la seguridad social (ver punto siguiente).

## CUADRO 12

*Costo de incrementar en un 10 % las retribuciones de todos los agentes de la administración nacional. En millones de pesos*

	Presupuesto Oficial 2006	Est. Realista 2006	Diferencias	Incrementos de 10% para 2006	Diferencia con la Estimación Realista	Diferencia con la Estimación Oficial
Remuneraciones	10.840,8	10.062,0	778,8	11.068,2	1.006,2	227,4

Fuente: Elaboración Propia en base a Presupuesto 2006.

VI) *Otorgamiento de un aumento del 10 % de los haberes del sistema de jubilaciones y pensiones que estén por encima del nuevo valor del haber mínimo universal de \$ 500. Medida que procura mantener el poder adquisitivo de los citados haberes durante el 2006.*

Esta medida tiene el mismo objeto que la anterior. Mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones ante el supuesto de crecimiento

del IPC en 9,3 % anual. Otorgar un aumento del 10 % sobre el conjunto de la masa destinada a jubilaciones y pensiones asciende a \$ 2.592,2 millones. Cabe consignar que el abultamiento de esta partida es del orden de \$ 2.845,9 millones. Es decir superior en \$ 253,7 millones de pesos de lo que la medida requiere. Así con este remanente se puede financiar el faltante de la medida anterior.

CUADRO 13

*Costo de incrementar en un 10 % las masa de jubilaciones y pensiones.  
En millones de pesos*

	<b>Presupuesto Oficial 2006</b>	<b>Est. Realista 2006</b>	<b>Diferencias</b>	<b>Incrementos de 10% para 2006</b>	<b>Diferencia con la Estimación Realista</b>	<b>Diferencia con la Estimación Oficial</b>
<b>Jubilaciones</b>	<b>28.767,9</b>	<b>25.922,0</b>	<b>2.845,9</b>	<b>28.514,2</b>	<b>2.592,2</b>	<b>-253,7</b>

Fuente: Elaboración Propia en base a Presupuesto 2006.

VII) *Aumento del 10 % en las remuneraciones de todos los agentes de los estados provinciales, de manera de mantener el poder adquisitivo de los salarios provinciales durante el 2006.*

Se propicia por esta vía garantizar que los agentes provinciales también mantengan el poder adquisitivo para el 2006. En todo caso quedará para las

propias administraciones provinciales potenciar aumentos de salarios que permitan incrementos en el poder adquisitivo real de los estatales provinciales. Se consigna que la medida tiene en cuenta al conjunto de los estatales provinciales: docentes, personal médico, administrativos, judiciales, de seguridad, etc. El costo neto de esta medida asciende a \$ 3.506,1 millones.

CUADRO 13

*Costo de incrementar en un 10 % las masa de salarios de los estatales provinciales (salud, educación, justicia, administración, seguridad, etc.). En millones de pesos.*

	<b>Presupuesto Oficial 2006</b>	<b>Incrementos de 10% para 2006</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Jubilaciones</b>	<b>35.061,0</b>	<b>38.567,1</b>	<b>3.506,1</b>

Fuente: Elaboración Propia en base a Presupuesto 2006.

VIII) *Creación de un fondo fiduciario para financiar capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas de hasta 40 empleados, cuya facturación anual con IVA incluido no supere los \$ 5.500.000. Este stock de recursos debe darle financiamiento a los emprendimientos de los citados agentes económicos que tengan como horizonte satisfacer el incremento de demanda popular. Se jerarquizarán aquellos emprendimien-*

*tos que potencien el impacto ocupacional, el balance de divisas y el desarrollo tecnológico propio. Se propone un fondo con recursos por \$ 3.245,3 millones de pesos durante el 2006.*

D) *El costo total de las medidas y su impacto*

El conjunto de las medidas propuestas tiene un costo neto anual de \$ 24.681,4 millones. (Ver cuadro 14).

## CUADRO 14

*Costo neto de las políticas sociales propuestas. En millones de pesos*

Propuestas	Costos Netos
Universalizar las Asignaciones Familiares de \$60	\$ 9.085.204.366
Seguro de Empleo y Formación para todos los Jefes de hogar desocupados	\$ 3.398.653.429
Universalización del haber jubilatorio mínimo \$390	\$ 6.910.437.187
Incrementar el Haber Mínimo \$500	\$ 5.287.088.870
Aumento del 10% en las remuneraciones de los agentes de la Administración Nacional.	\$ 227.400.000
Aumento del 10% en las jubilaciones y pensiones por encima de la mínima	- \$ 227.400.000
Fondo para otorgar aumentos a estatales y docentes provinciales	\$ 3.506.100.000
Fondo de crédito para las pymes	\$ 3.245.330.000
<b>Costo Neto del total de las propuestas</b>	<b>\$ 31.432.813.852</b>

Cabe notar que el conjunto de las medidas propuestas, si bien representan un aumento del presupuesto del orden del 33 %, apenas representan un 5,3 % del PBI. Es decir es una propuesta presupuestaria perfectamente posible. Estaríamos propiciando

así pasar de un 16 % de la participación del Estado nacional en la economía, a un 21,3 %. Porcentaje este último más acorde con los países de la región. Ver cuadro 15.

## CUADRO 15

*Costo neto de las políticas sociales propuestas. En % del PBI 2006*

Propuestas	Costos Netos
Universalizar las Asignaciones Familiares de \$60	1,5%
Seguro de Empleo y Formación para todos los Jefes de hogar desocupados	0,6%
Universalización del haber jubilatorio mínimo \$390	1,2%
Incrementar el Haber Mínimo \$500	0,9%
Aumento del 10% en las remuneraciones de los agentes de la Administración Nacional.	0,0%
Aumento del 10% en las jubilaciones y pensiones por encima de la mínima	0,0%
Fondo para otorgar aumentos a estatales y docentes provinciales	0,6%
Fondo de crédito para las pymes	0,5%
<b>Costo Neto del total de las propuestas</b>	<b>5,3%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

De lo expuesto surge la plena posibilidad de encarar lo que estamos proponiendo. No obstante puede señalarse que una sola de las medidas propuestas utilizada a fondo permite resolver prácticamente en forma inmediata el crimen del hambre en

la Argentina. Nos referimos a la asignación universal por hijo con un valor de \$ 150 por cada menor y generalizar la ayuda escolar anual en \$ 130, La medida tendría un costo neto de \$ 25.214,7 millones (ver cuadros 16 y 17).

CUADRO 16

*Costo de implementar la universalización de las asignaciones familiares de \$ 150 a todos los menores de 18 años y la ayuda escolar de \$ 130. En pesos corrientes*

Población	Cantidad	subsidio	Total Anual
Menores de 18 años	13.785.922	150	26.882.547.303
Entre 6 y 18 años	9.406.360	130	1.222.826.775
<b>Costo Bruto de las Políticas Sociales a Menores</b>			<b>28.105.374.078</b>

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

CUADRO 17

*Costo de implementar la universalización de las asignaciones familiares de \$ 150 a todos los menores de 18 años y la ayuda escolar de \$ 130, neto de los flujos previstos para los programas de asignaciones familiares del presupuesto del 2006. En pesos corrientes*

Medida	Pesos
Costo Bruto de las Políticas Sociales a Menores	28.105.374.078
Ahorros por programa de asignaciones familiares	2.890.641.330
<b>Costo Neto de las Políticas Sociales a Menores</b>	<b>25.214.732.748</b>

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

La medida propuesta tendría un impacto inmediato en la eliminación de la indigencia. Prácticamente sólo estarían en esta situación 892.426 argentinos (que no están en hogares con población menor y

por ende debe ser otro instrumento el que lo saque de la indigencia), ubicándose la tasa en un 2,3 % de la población. (Ver cuadro 18.)

CUADRO 18

*Efectos en la caída de la indigencia de universalizar las asignaciones familiares de \$ 150 a todos los menores de 18 años y la ayuda escolar de \$ 130.*

	Situación Actual	Con la medida	Diferencia	Variación (%)
Personas Indigentes	5.316.245	892.426	-4.423.819	-83,2%
Tasa de Indigencia	13,6%	2,3%	-11,3%	-83,2%

Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006

Por otra parte, también se reducirían drásticamente los niveles de la pobreza. La medida reduciría en prácticamente a la mitad la tasa de po-

breza, pasando de 38,5 % a 21,9 %, permitiendo que salgan de la pobreza 6.467.442 argentinos (ver cuadro 19).

## CUADRO 19

*Efectos en la caída de la pobreza de universalizar las asignaciones familiares de \$ 150 a todos los menores de 18 años y la ayuda escolar de \$ 130*

	<b>Situación Actual</b>	<b>Con la medida</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Variación (%)</b>
<b>Personas Pobres</b>	<b>15.029.035</b>	<b>8.561.593</b>	<b>-6.467.442</b>	<b>-43,0%</b>
<b>Tasa de Pobreza</b>	<b>38,5%</b>	<b>21,9%</b>	<b>-16,6%</b>	<b>-43,0%</b>

**Fuente: Elaboración propia en base a ANSES, INDEC y Presupuesto 2006**

### E) El financiamiento

Diversas son las fuentes que hacen perfectamente posible la implementación para el 2006 de las medidas propuestas. A continuación presentamos las más importantes.

#### 1) El autofinanciamiento de la propuesta

Una propuesta como la que aquí planteamos tiene un elevado componente de autofinanciamiento. Esto es así porque inyectar una masa de recursos de \$ 24.681,4 millones como lo que aquí proponemos, que tiene por objeto directo el consumo popular, presenta un elevado componente de captura por vía del sistema tributario (principalmente a causa del IVA). De mínima la masa de recursos que se inyecta permite captar fondos por aproximadamente \$ 5.183,1 millones.

Además, por el efecto del multiplicador, la masa de recursos que se inyecta a consumo supone un incremento en las ventas de las empresas, lo que a su vez financia mayores incrementos en el empleo y por ende en la masa salarial que nuevamente se destina a consumo. De esta manera, la masa de recursos que se inyecta se multiplica por dos veces y media como consecuencia del impacto en la demanda, lo que permite obtener una recaudación de máxima \$ 16.500 millones. Consideramos prudente estimar como recaudación posible el promedio de la recaudación mínima y de la máxima. Así el conjunto de medidas tiene un autofinanciamiento de \$ 11.062,6 millones (equivale al 35 % del conjunto de las medidas).

#### 2) Utilización plena del superávit financiero

El proyecto de presupuesto 2006 prevé un resultado financiero del orden de los \$ 7.439,5 millones. Este superávit no tiene ninguna asignación presupuestaria. La práctica de los ejercicios fiscales de la actual gestión, principalmente para el 2004 y 2005,

han consistido en realizar superávit financieros que han derivado en mayores pagos por deuda a los organismos internacionales en línea con la propuesta de desendeudamiento que pregonan dichos organismos. Esta impopular práctica presupuestaria parece estar presente en la definición de un superávit financiero que es un 60 % superior al presupuestado para el 2005.

Creemos que en la situación que atraviesa la Argentina, los acreedores privilegiados tienen que dejar de ser los organismos financieros internacionales para otorgar este lugar a la resolución de las graves necesidades que atraviesan los sectores populares. Por ende, proponemos utilizar plenamente el superávit financiero en el financiamiento de las medidas que aquí proponemos.

#### 3) Subestimación de recursos

El proyecto del presupuesto 2006 repite lo que ya parece una tradición del ministro Lavagna en la confección del presupuesto. Esta práctica consiste en ocultar recursos por vía de proyectar una baja tasa de crecimiento del producto (4 % para el 2006) y una baja elasticidad recaudación-producto (del 0,9).

El ocultamiento de recursos surge porque aun suponiendo que el PBI en el 2005 termine creciendo al 7,3 % (como se dice en el presupuesto), dicho crecimiento tiene garantizado un arrastre estadístico de alrededor del 3,7 %. Es decir, crecer al 4 %, como dice el presupuesto, supone que en el 2006 sólo se creará un 0,3 %.

Por otro lado, la elasticidad de la recaudación-producto viene siendo en el 2005 del 1,12 en lugar de 0,9 como se prevé en el presupuesto. Así las cosas, de una pauta más real de crecimiento del PBI (6,5 %) y estimando distintas elasticidades (todas inferiores a lo que hoy ocurre) surge el siguiente cuadro:

## CUADRO 20

*Estimación de los recaudación oculta del presupuesto 2006. Distintas hipótesis de elasticidades recaudación-producto.*

Aumento del PBI	Elasticidad recaudación - producto	Aumento de la recaudación total	Aumento de la recaudación de la Administración Nacional
6,5	0,9	\$ 2.691,1	\$ 2.152,9
6,5	1,0	\$ 4.470,1	\$ 3.576,1
6,5	1,1	\$ 6.327,3	\$ 5.061,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales.

Queda claro que el ocultamiento de recursos que el ministro presenta oscila en un rango que va desde un piso de \$ 2.691,1 millones a un máximo de \$ 6.327,3 millones. Tomaremos como hipótesis para el cuadro de financiamiento obtener durante el 2006 \$ 3.576,1 millones adicionales a lo presupuestado para la administración nacional.

Creemos que la totalidad de los recursos ocultos en el presupuesto deben ser utilizados en dirección a lo que proponemos. Ya durante el 2004 y el 2005 los recursos ocultos fueron destinados a mayores pagos por deuda a los organismos internacionales. En el momento actual ha trascendido que el gobierno presentará un decreto por medio del cual se establece que todo recurso que se encuentre mensualmente por arriba de lo presupuestado no podrá tener asignación sino que se destinará a un fondo anticíclico. Además de que esta medida tiene un difícil control, porque el presupuesto es una proyección anual y no mensual de la recaudación (faltaría un presupuesto mensualizado para controlar aquello que mensualmente se encuentre por arriba), lo más grave es que un fondo anticíclico reconoce que la situación socio-económica en la Argentina actual es la que corresponde a la normalidad del país. De esta manera, lo que se busca, es que todo excedente presupuestario asegure el normal pago de los acreedores en los momentos de recesión. Para nosotros, la prioridad es resolver hoy las urgencias sociales y destinar la totalidad de recursos disponibles a tal fin.

#### 4) Subejecución de gastos

Ya hemos descripto la estrategia de abultamiento de gastos en el presupuesto. Dijimos que los mismos alcanzaban \$ 8.616,7 millones para el 2006. Descontando los \$ 3.654,4 millones en que están abultadas las partidas de salarios y prestaciones a la seguridad social (que hemos utilizado para financiar el aumento del 10 % de las mismas) permanecen aún \$ 4.962,3 millones que no tienen compromiso de asignación. Los mismos deben servir a darle financiamiento a la estrategia que proponemos.

5) Restitución de contribuciones patronales: a los niveles del año 1993 excepto para las pymes

*de hasta 40 empleados que facturen anualmente con IVA incluido por un monto inferior a \$ 5.000.000.*

La rebaja de las contribuciones patronales en el marco de lo que se denominó devaluación fiscal fueron instrumentadas bajo el pretexto que las mismas permitirían bajar el nivel de desempleo y hacer competitiva, en el marco del tipo de cambio fijo, nuestra economía. Lejos de mejorar la situación ocupacional, las citadas rebajas redundaron en un subsidio por menores costos a las grandes empresas, desfinanciando de esta manera al sistema previsional. Es decir, los bajos niveles de las prestaciones (jubilaciones y pensiones) es la expresión del subsidio empresarial que se instrumentó a partir de las citadas rebajas en las contribuciones de los empleadores. Por si fuera poco, el desempleo no bajó sino que aumentó y nunca bajó del dígito. En el contexto de la devaluación, con el consiguiente abaratamiento de los denominados costos laborales y con la vigencia de una relación con el dólar en torno a los \$ 3, se vuelve insostenible seguir manteniendo las rebajas en las contribuciones. Las hoy vigentes oscilan entre un 17 % y un 21 % del salario según sea la actividad económica de la empresa. Restituir las cotizaciones a los niveles previos a las reducciones sistemáticas que se realizaron desde el año 1993 a la actualidad, implicaría llevar las contribuciones patronales al 33 % del salario. Es decir, se tendría un incremento de la recaudación de contribuciones patronales entre un 100 % y un 50 % de los niveles actuales. Esta restitución de las contribuciones patronales a los niveles del año 1993 no debe realizarse sobre las pymes de hasta 40 empleados cuya facturación anual con IVA incluido no supere los \$ 5.500.000 (representan como mucho el 40 % de los asalariados registrados), hasta tanto la política económica no prevea mecanismos por los cuales estas medidas no impliquen una expulsión de la mano de obra que las pymes mantienen.

Así, la restitución de las contribuciones patronales permitiría incrementar los recursos previsionales que actualmente rondan los \$ 16.979,2 millones, en \$ 7.726,9 millones adicionales. (Ver cuadro 21)

## CUADRO 21

*Incremento de la recaudación de las contribuciones patronales por la restitución de los niveles vigente al 93*

Porcentaje de Contribución Actual	Propuesta de Aumento	Incremento en %	Aumento en la Recaudación	Aumento en la Recaudación (excluyendo a las pymes)
17%	33%	94%	\$ 15.980,4	\$ 9.615,7
21%	33%	57%	\$ 9.702,4	\$ 5.838,1
<b>PROMEDIO</b>			<b>\$ 12.841,4</b>	<b>\$ 7.726,9</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del Presupuesto 2006.

Lo hasta aquí expuesto, en materia de financiamiento permite obtener recursos por un monto de \$ 34.767,4 millones. (Ver cuadro 13)

## CUADRO 13

*Fuentes de financiamiento posibles. En millones de pesos*

Fuentes	En millones de pesos
Aumento de la Recaudación por aumento del consumo y nivel de actividad	\$ 11.062,60
Superávit Financiero del Presupuesto 2006	\$ 7.439,50
Subdeclaración de Ingresos de la Administración Nacional	\$ 3.576,10
Subejecución de los gastos de la Administración Nacional	\$ 4.962,30
Incrementos de la Recaudación por restitución de las contribuciones patronales a niveles de 1993 excepto PyMes (cálculo promedio)	\$ 7.726,90
<b>Total de flujos de fondos recaudatorios</b>	<b>\$ 34.767,40</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales.

Los recursos presentados le otorgan viabilidad financiera a las políticas presupuestarias que proponemos. Sin embargo, no son los únicos recursos con los que cuenta el gobierno para encarar una redistribución progresiva del ingreso, como aquí proponemos. Existen otras alternativas que requieren una decisión política para potenciar estas medidas. Las principales son:

1) Eliminación (pero no desaparición) del sistema privado de jubilaciones y fondos de pensión: implica captar los aportes de los trabajadores activos para capitalizar al sistema público de reparto en línea con la necesaria reforma del sistema previsional, y dejar la capitalización individual de fondos aparte del aporte como una opción voluntaria. Esta medida permitiría obtener recursos previsionales del orden de los \$ 4.642,5 millones anuales.

2) Una reforma impositiva que revierta el fuerte carácter regresivo del sistema tributario, que entre otras medidas, privilegie:

- Gravar rentas y patrimonios exentos
- Restituir el impuesto a la herencia.
- Reformular el impuesto a las ganancias. Lo que implica eliminar las exenciones a las transacciones financieras, a la compraventa de acciones, gravar la distribución de dividendos (de manera de premiar la reinversión productiva de las empresas), elevar el mínimo no imponible, etc.
- Ubicar la figura del grupo empresario dentro de un padrón especial de contribuyentes de manera de evitar los precios de transferencia y hacer efectivo el criterio de renta mundial.
- Gravar consumo suntuario
- Reformular la tasa de aranceles para la producción importada, etc.

Una reforma impositiva de esta naturaleza permitiría, a partir del 2007, elevar la recaudación en porcentaje del PBI. Téngase en cuenta que cada punto de recaudación en porcentaje del PBI implica recursos adicionales por montos de \$ 5.939,7 millones.

3) La utilización de la chequera del jefe de Gabinete: chequera que se expresa en la partida presupuestaria de "Obligaciones a cargo del Tesoro" que

tiene prevista una abultada partida de \$ 9.249,6 millones la cual podría servir como eventual fuente de financiamiento. (Ver cuadro 14.)

**Cuadro N° 14: LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CREDITO</b>
<b>90</b>	<b>Atención del estado de Emergencia por Inundaciones e Inclemencias Climáticas</b>	<b>673.000</b>
<b>91</b>	<b>Atención Política Salarial</b>	<b>387.951.000</b>
<b>92</b>	<b>Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial</b>	<b>4.084.000.000</b>
<b>93</b>	<b>Coparticipación Fed. al Gobierno de la Ciudad Aut. de Bs As y la Prov. Tierra del Fuego</b>	<b>1.039.500.000</b>
<b>94</b>	<b>Asistencia Financiera a Sectores Económicos</b>	<b>216.045.000</b>
<b>95</b>	<b>Asist. Financiera a Empresas Pub. y Ente Binacional</b>	<b>1.348.139.000</b>
<b>96</b>	<b>Atencion Serv. Financieros, Gastos Judiciales y Otros Servicios</b>	<b>8.820.000</b>
<b>97</b>	<b>Aportes al Sector Externo</b>	<b>174.700.000</b>
<b>98</b>	<b>Asistencia Financiera a Provincias</b>	<b>1.037.495.000</b>
<b>99</b>	<b>Otras Asistencias Financieras</b>	<b>952.306.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.249.629.000</b>

**Fuente: Presupuesto 2006**

Queda claro, entonces, que hay posibilidad de encarar una estrategia distributiva seria para el año 2006. Obviamente que lo expuesto requiere un cambio en el conjunto de las políticas económicas. Entre otras parece necesario que acompañar esta estrategia supone:

– *Otra política sobre deuda.* Con el objeto de no amortizar capital a cuyo efecto debiera impulsarse la investigación del papel de los organismos multilaterales de crédito durante la última etapa de la convertibilidad donde otorgaron préstamos para financiar la brutal fuga de capitales violando de esta manera sus propios estatutos. También debiera impulsarse un estrategia de quita en la deuda con los citados organismos con las mismas característi-

cas que las que obtuvieron los acreedores privados

– *Otra política de precios.* Donde el Estado cumpla un papel activo en la regulación de los mercados concentrados y potencie el desarrollo de las economías regionales. En este sentido deben ser explícitas las medidas que privilegien el precio local en base a costo local para los productos transables donde el país tiene ventajas naturales (alimentos y energía), el replanteo de los subsidios fiscales al capital concentrado, etc.

– *Otra política en materia de inversiones.* Donde el Estado pase a ocupar el papel rector de una estrategia que densifique al tejido productivo.

*Claudio Lozano.*

**Volver**